

La crisis de gobernabilidad en Bolivia: causas y efectos

Un enfoque con perspectiva indígena

Tomasa Yarhui Jacome

Quiero comenzar señalando, que quien les habla es una mujer de raíces indígenas quechuas en Bolivia y ha sido una de las primeras de esta condición, en ocupar el alto cargo de Ministra de Estado en la Cartera del ministerio de asuntos campesinos pueblos indígenas y originarios.

Es por ello que en esta oportunidad, quiero compartir con ustedes, un enfoque distinto en el análisis de la crisis de gobernabilidad en Bolivia: sus causas y sus efectos. Y quiero hacerlo desde la perspectiva de las preocupaciones que tenemos los indígenas en mi país.

En Bolivia, la actual crisis de gobernabilidad se traduce en: a) una total falta de responsabilidad de gobernantes y gobernados respecto de nuestro destino común como bolivianos; b) el descrédito creciente de los partidos políticos que se supone son los vehículos de representación y articulación política de la sociedad civil; c) la fragmentación de la sociedad por demandas regionales, locales y corporativas; d) la creciente ola de confrontaciones de distinta naturaleza y con diversos intereses; y, e) la inviabilidad de acuerdos inmediatos que posibiliten un clima de armonía y paz para emprender el desarrollo nacional.

La crisis de Estado

Resulta que estamos descubriendo, por decirlo de algún modo, después de más de 180 años de vida republicana, que la población boliviana no es homogénea (ni ha logrado homogeneizarse a pesar de los históricos intentos) y por el contrario, es **multicultural, plurilingüe, multiétnica**, compleja y con particularidades regionales diferentes. Y sin embargo, a pesar de esa realidad, desde la creación de la república se ha intentado construir sin respetar las particularidades y con niveles significativos de marginación y exclusión social.

La mayoría de la población boliviana es indígena, más del 60% según los datos del último censo de población y vivienda, segmento conformado por los

aymaras, quechuas, guaraníes, chiquitanos y cerca de una treintena de grupos étnicos diferentes. A pesar de ello, resulta llamativo ver, como éstos grupos han estado marginados y excluidos del ordenamiento jurídico, de la economía y de la propia vida política de la República. Cómo no entender entonces, que las confrontaciones sociales y culturales en la población del Estado boliviano, tienen sus principales causas en esta exclusión y marginamiento? Desde mi punto de vista, esta es una de las principales causas de la crisis del Estado, que ahora se traduce además en crisis de gobernabilidad.

La tierra ha sido distribuida históricamente de manera injusta y desigual, el 20% de las unidades agropecuarias (medianos y grandes empresarios) poseen el 97% de las tierras cultivables, mientras que el 80% restante (pequeños productores campesinos e indígenas) solo tienen acceso al 3% de las tierras cultivables. Paradójicamente además, la mayoría de los productos agrícolas de consumo interno son producidos por los pequeños productores, lo que evidencia niveles elevados de especulación con las tierras improductivas por parte de los terratenientes.

Administrativamente, el territorio nacional ha sido manejado de manera centralista y con fuertes rasgos de corrupción e inoperancia, ahora las regiones y los grupos indígenas reclaman autonomías con base territorial en los departamentos y en las áreas con presencia indígena, situación que de no merecer una respuesta oportuna, concertada y aceptada, pone en riesgo la propia integridad física del país.

La estructura jurídica estatal, los tres poderes del Estado: el legislativo, el ejecutivo y el judicial, han sido estructurados a imagen y semejanza de modelos europeo occidentales, sin tomar en cuenta las particularidades de diversidad cultural de Bolivia. Es por esta razón, que la presencia de la población indígena en términos de participación, toma de decisiones, gestión de políticas públicas, en las leyes y en la normativa general del país, es mínima o en su defecto casi nada.

Recientemente, a partir del surgimiento de los movimientos sociales y de las luchas populares en contra del modelo establecido, se ha logrado una incorporación notable de representantes indígenas en el parlamento, antes éste

era un lugar reservado y privilegiado para los representantes políticos de los sectores de la clase dominante, de los intelectuales y de los dirigentes políticos que en su mayoría no representan a los indígenas o la clase popular.

Sin embargo, a pesar de la presencia significativa de los indígenas en el parlamento, la conducta de los políticos tradicionales y de los propios partidos no ha variado significativamente, aun se continúa privilegiando las componendas, los acuerdos por debajo y las alianzas superficiales para aprobar las leyes y fiscalizar los actos del Ejecutivo (que en muchos casos es más una actitud de oposición que de fiscalización propiamente dicha). Este es un elemento que contribuye a profundizar la crisis de gobernabilidad..

En el ejecutivo, las políticas públicas, los planes, programas y proyectos gubernamentales, tenían y tienen una visión más urbana que no toma en cuenta la perspectiva indígena y cultural en su diseño y ejecución. Por otra parte, no existía ni siquiera una Cartera de Estado que atiende las demandas específicas del sector indígena. Nótese a manera de ejemplo, que en el caso boliviano nunca ha existido un programa de desarrollo económico productivo orientado a los indígenas y si los ha habido (y muchos) que favorecían a los sectores de empresarios agropecuarios.

En la administración pública la presencia de funcionarios indígenas no supera el 1% del total de empleados y los trámites son prioritariamente realizados en función al idioma oficial, el español, sin tomar en cuenta las lenguas de los aymaras, quechuas, guaraníes, etc., solo para mencionar a los grupos más significativos que existen en mi país.

A nivel del poder judicial, la incorporación de las demandas indígenas ha sido excesivamente lenta, pues en la mayoría de los procedimientos y trámites judiciales que no respetan las diferencias culturales ni orales existentes entre los diversos grupos culturales.

En suma, se puede afirmar que la estructura jurídica del Estado boliviano responde y ha respondido históricamente, a los intereses de grupos minoritarios que son los que generalmente tienen el poder, en detrimento de la población mayoritaria de comunidades y pueblos indígenas de Bolivia, estos factores son

los que han contribuido a la profundización de las diferencias, y por lo tanto, a la crisis de gobernabilidad.

En lo que hace al tema de la soberanía, éste es quizá, el factor que más cuestionamientos recibe en el ámbito de los debates internos del país, pues las políticas económicas y monetarias que se implementan en Bolivia, como en la mayoría de los países latinoamericanos, son producto de las imposiciones de los organismos internacionales que a la de los propios intereses bolivianos.

No solo en los aspectos de naturaleza económica, o en los referidos a la explotación de los recursos naturales, han habido constantes intromisiones externas que han puesto en cuestión el tema de la soberanía nacional; sino, inclusive en aspectos de índole política, los funcionarios diplomáticos de embajadas extranjeras se toman la libertad de opinar sobre asuntos políticos internos demostrando niveles permanentes de injerencia política.

Todos estos factores relacionados con la cuestionada soberanía nacional, han puesto en controversia a gobernantes y gobernados y en contradicción a los diferentes sectores de la población boliviana, ya sea porque a unos les importa poco o nada estos niveles de intromisión y en otros casos, porque están dispuestos a combatirlos.

La crisis de gobernabilidad

a) Falta de responsabilidad de gobernantes y gobernados

En los últimos años, hemos cambiado por la vía del acortamiento del mandato dos presidentes: nada significativo ha sucedido y la crisis de gobernabilidad continúa su curso.

La rápida caída del presidente Sánchez de Lozada se debió entre otros factores, a la falta de tacto, al uso indiscriminado de la violencia estatal, a la ineficiencia y a la ineficacia de sus acciones. En un país convulsionado, confrontado, que reclamaba respuestas inmediatas a sus problemas de empleo, de ingresos y que enarbolaba un conjunto de reivindicaciones de orden político, se requería de un gobierno que se esforzase en la búsqueda de soluciones concertadas y

equilibradas, no de un gobierno que en medio de la crisis de gobernabilidad de señales de fuerza y de menosprecio por los movimientos sociales que además estaban en pleno proceso de asenso. Fue justamente esa lectura errada de la realidad y la extremada soberbia los factores que significaron a la postre, su irremediable desmoronamiento.

Si bien en el caso de Mesa, los esfuerzos por encontrar soluciones concertadas fue el rasgo más sobresaliente desde el principio de su gobierno, no es menos cierto, que la ineficiencia y la falta de eficacia de sus acciones se tradujeron posteriormente en un enfrentamiento estéril con los otros poderes del Estado: el legislativo y el judicial. A esto se debe añadir, en el caso del presidente Mesa, que la ausencia de un aparato político (partido) que respalde su gestión en el legislativo se constituyó en otro de los detonantes de su caída.

Rodríguez Veltzé, llega a “Palacio Quemado” con un mandato claro y preciso, el de organizar las elecciones para elegir al nuevo gobierno, al legislativo y a los prefectos departamentales. A pesar de este mandato, los sectores sociales no dejan de presionar y de plantear de modo radical sus reivindicaciones. Las elecciones empero, pueden constituirse en el principio de la solución a la crisis de gobernabilidad. Esto dependerá de las acciones que se emprendan para resolver los problemas inmediatos y los asuntos de orden estructural por parte del nuevo gobierno y es por eso en realidad que se vive un clima de gran expectativa con una mezcla de incertidumbre.

Pero si esto pasaba y pasa con los gobernantes ¿Qué pasa con los gobernados? ¿Qué sucede en el seno de la sociedad civil y en medio de ésta con el movimiento indígena nacional?

Sucede que tantos años de postergación, discriminación, marginación y exclusión ha creado un ambiente de susceptibilidad y de falta de confianza en las políticas de gobierno y la gente se vuelve a las calles exigiendo reivindicaciones y demandas, que aunque son demandas legítimas, las movilizaciones se han convertido en irracionales llegando a un punto de anarquía y caos.

Pero los sectores de la oligarquía, también se aprovechan de la crisis de gobernabilidad y arremeten con todo en la búsqueda de sus propias demandas, no en vano se dice en “río revuelto ganancia de pescadores” y es por eso, que la demanda de las autonomías departamentales halla su mejor escenario de realización en medio de la actual crisis(aquí no se cuestiona la validez de la propuesta, sino la forma y el momento en que se propone para su consideración).

Nadie piensa en el bien común; cada quien jalaba y jala el carro en la dirección que le conviene; casi nadie piensa en el destino futuro del país como totalidad, a pesar de sus particularidades; a nadie parece importarle los peligros que se ciernen sobre la patria. Es por eso que señalo, que en este escenario de crisis, hay una ausencia total de responsabilidad de los gobernantes y gobernados. O somos capaces de asumirlo así, de manera autocrítica, o no seremos capaces de enfrentar los problemas de uno de los elementos centrales de la crisis de gobernabilidad que sacude al país. Basta ya, de que los unos señalemos a los otros como los únicos culpables, basta ya, de que los de “arriba” se quejen de la incomprensión de los de “abajo”, basta ya, de las soluciones superficiales, seamos capaces todos los bolivianos, de asumir nuestra cuota de responsabilidad y de avanzar hacia un gran desarme espiritual que nos permita encontrar derroteros comunes por el bien del país.

Sin embargo, también se hace necesario plantear de manera frontal y crítica, que la cooperación internacional y los organismos financieros mundiales deben flexibilizar sus políticas, deben brindar una ayuda más determinante a mi país y deben conjuntamente con los bolivianos, hacer esfuerzos desde sus propias perspectivas para ayudar a Bolivia a superar la crisis de gobernabilidad como factor de equilibrio regional en Sudamérica.

b) El descrédito de los partidos políticos

Los partidos políticos son por definición, los medios a través de los cuales se canaliza la representación de la sociedad civil ante el Estado, son además, los que articulan las demandas de los sectores sociales ante el gobierno y son los conductos de expresión ciudadana a través de los cuales hacemos escuchar nuestra manera de pensar frente a los problemas del país.

En el caso de Bolivia, los partidos políticos tradicionales, no tradicionales, emergentes o en proceso de consolidación, no cumplen con los requisitos antes señalados. Han dejado de ser los canales de la representación de la sociedad civil y están siendo reemplazados por las agrupaciones ciudadanas que tampoco son la solución.

*La “democracia pactada” parece haber llegado a su fin, los acuerdos entre partidos políticos a objeto de garantizar la gobernabilidad ya no tienen eco, hemos desgastado tanto este tipo de instrumentos, pues hemos realizado acuerdos de todo tipo, tamaño y naturaleza. La población ya no confía en ellos y peor aun, en medio de la crisis de credibilidad de los partidos ni ellos mismos se animan a dar un paso como este.

Sin embargo, los partidos políticos son importantes en la democracia, por ello debe emprenderse un proceso de recomposición, cambio de actitudes, renovación total y visión distinta y de constitución de los mismos de manera acelerada, de modo tal, que este otro elemento de la crisis de gobernabilidad se vea también resuelto.

La construcción de una identidad nacional colectiva que como bolivianos nos permita un destino común, aun partiendo de la realidad de nuestra diversidad, aun reconociéndonos diferentes, aun tengamos visiones distintas de desarrollo. Lo que nos está faltando es reconocer y aceptar que vivimos en un solo país y que somos parte de una territorialidad mayor **llamada Bolivia**.

La Asamblea Constituyente puede convertirse en el punto de partida de este nuevo proceso de reconstrucción nacional, de este intento por dotarnos de un nuevo “pacto social” que nos permita a los bolivianos comprender y asumir la responsabilidad de un destino común. Las demandas locales, regionales, sectoriales, corporativas y de otra naturaleza, pueden encontrar en esta reunión, la posibilidad de ser canalizadas, reflexionadas, discutidas, concertadas y consensuadas para encontrar eso que nos está haciendo tanta falta, un destino común para todos los bolivianos. Que superando las contradicciones internas nos coloque en un escenario externo más favorable a la discusión con nuestros vecinos y con los países del contexto internacional, de manera tal, que se reestablezca en alguna medida nuestra soberanía nacional.

c) La creciente ola de confrontaciones y violencia

Si las elecciones pactadas para el 18 de diciembre próximo, no provocan un efecto tranquilizador y renovador (aunque sea por un tiempo corto) de modo tal que en él se puedan encarar soluciones inmediatas y de fondo se corre el riesgo de profundizar la crisis de gobernabilidad.

Este cuadro de confrontaciones pone en riesgo la propia democracia, más allá de la crisis de gobernabilidad, o de la crisis del Estado, se pone en riesgo el sistema como tal, se está al borde de un enfrentamiento que puede derivar en la división del país y es que esto es posible en la medida en que las demandas regionales, sectoriales o corporativas son más fuertes que la demandas de unidad de la población en su conjunto. Bolivia está viviendo uno de esos momentos de mayor fragilidad institucional y corre el riesgo de hacerse inviable como país.

No es mi intención mostrar una realidad extremadamente dramática; todo lo contrario, quiero alertar sobre los verdaderos peligros que existen hoy para los bolivianos, que los asumamos con valentía y que empecemos a trabajar en la búsqueda de las soluciones, en un clima de armonía y paz en el que planifiquemos y planteemos las soluciones a las demandas de los diferentes sectores y decir soluciones en este caso, equivale a decir propuestas concertadas. No pensarlo de esta manera, nos puede conducir a equivocaciones futuras.

d) La inviabilidad de los acuerdos coyunturales

Finalmente, quiero referirme a los acuerdos de tipo coyuntural, a los llamados “pactos de gobernabilidad” que en la Bolivia de las últimas décadas, se han puesto de manifiesto en reiteradas oportunidades.

La democracia pactada, como también se ha denominado a la forma como los bolivianos hemos encontrado salidas coyunturales a la crisis de gobernabilidad, parece haber llegado a su fin, pues ya nadie confía en este tipo de acuerdos y ni los propios partidos políticos parecen estar dispuestos a reeditar este tipo de convenios de carácter circunstancial.

“Pacto por la democracia”, Acuerdo de convergencia nacional” “Acuerdo por Bolivia”, etc. Han sido los nombres que hemos utilizado para bautizar acuerdos

de tipo coyuntural que nos permitieran enfrentar la crisis de gobernabilidad, algunos de ellos han dado ciertos resultados, también coyunturales, pero ninguno de ellos nos ha conducido a las soluciones de fondo, por eso el país está donde está, entre otras cosas, por ello creo que ha llegado la hora de avanzar en acuerdos de mayor aliento, de más larga duración, que apunten a solucionar los problemas estructurales y de fondo y nos permitan avizorar un mejor destino para todos los bolivianos.

Inclusión, participación y concertación frente a la crisis de gobernabilidad

La inclusión social de los sectores tradicionalmente marginados, como las comunidades y pueblos indígenas de occidente y de oriente, en la economía, en la política, en las leyes y en todos los órdenes del accionar nacional es una de las cuestiones más urgentes en la Bolivia de hoy, gran parte de los problemas de gobernabilidad actual, se deben a este marginamiento y exclusión.

En este contexto, la próxima Asamblea Constituyente debe ser el escenario donde se produzca esta inclusión social, desde el momento de su convocatoria, en la elección de los asambleístas, en las deliberaciones y finalmente la elaboración del nuevo pacto social que de allí surja.

La participación social, es otro de los elementos centrales ha ser considerados como prioritarios. Los movimientos sociales, los comités cívicos, las instancias de representación gremial, la propia Confederación de Empresarios Privado de Bolivia, están exigiendo a gritos se les escuche y se incorpore su participación en los debates, en los procesos de planificación y de ejecución de las soluciones concertadas entre todos los bolivianos. Participación, eso es lo que está exigiendo la sociedad civil.

Participación está exigiendo la sociedad civil organizada y como nunca antes, por ejemplo, el Comité Cívico de Santa Cruz se ha puesto a la cabeza de las reivindicaciones autonomistas y ha elaborado toda una propuesta técnica, legal y económica frente al tema.

Participación, quieren los indígenas a los que en esta oportunidad represento y que están peleando por que se les reconozcan sus derechos fundamentales.

Concertación, como producto de la inclusión y la participación, es una de las condiciones necesarias para avanzar. Concertación por Bolivia, sin descuidar las particularidades y diferencias existentes, seamos capaces de conducirnos por el camino de la unidad y de prosperidad. La falta de concertación, es también otra de las causas de la crisis de gobernabilidad.

Quiero finalmente, decirles que los indígenas bolivianos estamos dispuestos a contribuir a la superación de la actual crisis de gobernabilidad, aportando con nuestros esfuerzos, construyendo una sociedad más justa en la que nos incluyamos todos, queremos justicia, no venganza, queremos desarrollo y no pobreza, queremos igualdad de oportunidades para todos los bolivianos.

Muchas Gracias...